

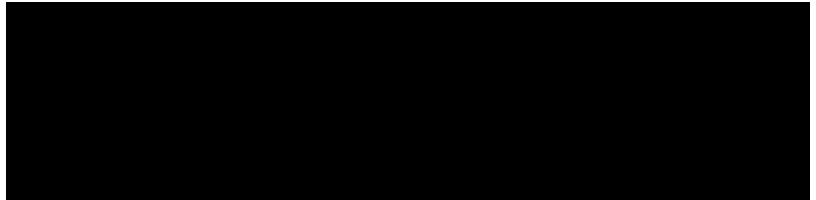


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

AMPARO EN REVISIÓN CIVIL: 294/2019.

RECURRENTE Y QUEJOSO:



MAGISTRADO PONENTE:
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN.

SECRETARIO:
GUSTAVO VILLEGAS PARRA.

Ciudad de México. Sentencia del Primer
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito, correspondiente a la sesión de veinticuatro
de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS, los autos para resolver el
amparo en revisión civil 294/2019 correspondiente al
juicio de amparo indirecto 680/2019-I, del índice del
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la
Ciudad de México; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.



██████████, ██████████, ██████████, mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil diecinueve, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto del Juez Noveno de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, que precisó de la forma siguiente:

"IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la autoridad antes señalada, se reclama la resolución dictada con fecha SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, en los autos del expediente 1022/2019, formado con motivo de la solicitud de providencias promovidas por mi poderdante, en contra ██████████

██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, LO ANTERIOR COMO ACTO PREJUDICIAL."

SEGUNDO. Tocó conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien por auto de cuatro de julio



de dos mil diecinueve, admitió a trámite la demanda, formó el expediente 680/2019.

TERCERO. Una vez seguido el proceso por sus cauces legales, el ocho de agosto de dos mil diecinueve, el juez del conocimiento celebró la audiencia constitucional y dictó la sentencia correspondiente, misma que quedó autorizada el veintinueve siguiente en la que determinó negar la protección constitucional.

CUARTO. Inconforme con esa resolución, la parte quejosa [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] interpuso recurso de revisión, radicado y admitido por este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en acuerdo de dos de octubre de dos mil diecinueve. Se ordenó correr traslado al representante social de la federación adscrito, quien se abstuvo de formular pedimento.

En estado de sentencia, por auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se turnaron los autos al magistrado Wilfrido Castañón León para formular el proyecto correspondiente.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Este tribunal colegiado es competente para conocer del presente recurso de revisión, por razón de materia y territorio, en virtud de que se impugna la sentencia dictada en un amparo indirecto, por un Juez de Distrito en Materia Civil con residencia en el lugar en que ejerce jurisdicción este tribunal de amparo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 28/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma adiciona y deroga el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización



por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

SEGUNDO. El recurso es procedente conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo toda vez que se impugna una sentencia de amparo indirecto dictada en audiencia constitucional.

TERCERO. El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo legal de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia se notificó por lista a la parte recurrente el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve (hoja 41 del amparo indirecto), notificación que surtió efectos el cinco de septiembre siguiente; por lo que el referido término transcurrió del seis al veinte de septiembre del mismo año, una vez excluidos los días inhábiles que fueron el siete, ocho, catorce, quince y dieciséis, del mismo mes y año;

mientras que el escrito de interposición del recurso fue presentado el doce de septiembre de la presente anualidad.

CUARTO. No se transcribirá la sentencia recurrida en que se apoyó la resolución impugnada, ni los conceptos de agravio hechos valer, al no existir disposición legal que obligue a este tribunal a incluir en este fallo para su análisis, el contenido literal de esos documentos.

No obstante, a efecto de poder analizar con suficiente información el sentido del proyecto de resolución, se adjuntaron al mismo, copia de la sentencia recurrida y de la demanda de amparo a los magistrados integrantes de este órgano colegiado.

QUINTO. Los agravios planteados son inoperantes en una parte e infundados en otra.

El primero de estos calificativos es así, en lo que concierne a lo que la recurrente aduce acerca



de que la sentencia recurrida infringió en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto es así, porque a través del recurso de revisión existe la imposibilidad de analizar si los jueces de distrito transgredieron derechos fundamentales, toda vez que este recurso no tiene el carácter de un medio de control constitucional, sino de un procedimiento de segunda instancia, cuya finalidad es investir a este tribunal colegiado con amplias facultades, incluso de sustitución, para examinar nuevamente los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para dictar su fallo.

Esto significa que, al juez de amparo en lo absoluto se le da la calidad de otra autoridad responsable, ya que si así se hiciera se tergiversaría el objeto para el que fue instituido el juicio de amparo, puesto que se permitiría que a través del recurso de revisión se ejerza un control constitucional

sobre otro control constitucional, lo que jurídicamente no correspondería a la naturaleza jurídica de dicho recurso, de ahí que sea inoperante lo alegado por el inconforme acerca de que la resolución recurrida vulneró en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.

Es aplicable a lo antes considerado, en términos del artículo sexto transitorio del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia P./J. 2/97, erigida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 1997, Novena Época, Tomo V, que es del tenor siguiente:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como



aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones

procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería



un control constitucional sobre otro control constitucional."

Por otra parte, en lo que concierne al estudio de fondo del asunto, son infundados los agravios expresados, en virtud de que la circunstancia de que la solicitante de una medida precautoria sea una [REDACTED] no la exime de la obligación de otorgar la garantía que establece la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio para el caso de que la solicitante no presente la demanda dentro del plazo previsto por el código antes referido, o bien porque aunque promueva la demanda, el deudor sea absuelto en el juicio correspondiente.

Lo antedicho es así, porque aunque la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio es contradictoria con respecto al normativo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, en tanto que la primera de estas disposiciones legales impone de manera genérica a la solicitante de una medida

precautoria la obligación de garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionarle a la parte deudora, sin hacer alguna distinción de la calidad de quien pide esa medida; mientras que, el segundo de estos preceptos legales, dispone que los integrantes del sistema bancario Mexicano no están obligados a constituir fianzas o depósitos debido a su solvencia económica.

Lo cierto es que en el caso debe prevalecer la disposición contenida en la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio, ya que la misma contienen una norma especial que regula el procedimiento a seguir en tratándose de una medida precautoria, y por su parte el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, constituye una norma general, debido a que se regula cuestiones ajenas al procedimiento que se debe observar en una providencia precautoria.

En efecto, de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en la



sentencia de siete de junio de dos mil diecinueve, que dictó el Juez Noveno de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las providencias precautorias, seguidas por la aquí quejosa y recurrente [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] en contra de [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] expediente 1022/2019, en la que

declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintisiete de mayo de la anualidad en cita que concedió la medida cautelar solicitada y le fijó a la promovente como garantía para que surtiera efectos esta medida la cantidad de \$15,624.90 (quince mil seiscientos veinticuatro pesos con noventa centavos).

Los antecedentes que dieron lugar al acto reclamado son los siguientes:

a) Mediante escrito de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (foja 1 del legajo de constancias),

[REDACTED]

[REDACTED]

promovió providencias precautorias en contra de

[REDACTED]

[REDACTED] con la finalidad de que se

ordenara la retención de dinero en cuentas bancarias,

de inversión, de cheques y/o fideicomisos que les

pertenezcan a las demandadas, hasta por la cantidad

de \$286,695.72 (doscientos ochenta y seis mil

seiscientos noventa y cinco pesos con setenta y dos

centavos), por corresponder al adeudo que las

enjuiciadas tienen por concepto de suerte principal,

intereses ordinarios y moratorios, así como el

correspondiente impuesto al valor agregado.

b) Por razón de turno el conocimiento del asunto le correspondió al Juez Noveno de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien le asignó el número de expediente 1022/2019, y por auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve (foja 54 del legajo de constancias), concedió la medida cautelar solicitada y



le fijó a la promovente como garantía para que surtiera efectos dicha medida, el importe de \$15,624.90 (quince mil seiscientos veinticuatro pesos con noventa centavos).

c) En desacuerdo con esta resolución, la actora interpuso en su contra recurso de revocación, que tramitado en legal forma fue resuelto, mediante sentencia de siete de junio de dos mil diecinueve (foja 68 del legajo de constancias) en la que se declaró infundado el citado recurso y se confirmó el proveído de veintisiete de mayo del presente año. Este es el acto reclamado en el juicio de amparo.

Ahora bien, es correcta la decisión del juez de distrito al establecer que aunque la quejosa posee la calidad de una Institución de Banca Múltiple tiene la obligación de exhibir la garantía que establece la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio, por ser este un requisito para que surta efectos la medida cautelar solicitada, cuya finalidad es garantizar los daños y perjuicios que se les puedan

ocasionar a las deudoras, para el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo que fija este Código, o bien en el supuesto de que en el juicio correspondiente sea absuelta la parte demandada.

La razón de ser de la obligación de exhibir esta garantía estriba en que la medida provisional es otorgada por el juzgador sin concederle a la parte demandada la garantía de audiencia, esto es, que no se le da a la deudora la oportunidad de desvirtuar la procedencia del reclamo que le formula su contraparte.

Aun cuando es verdad que la disposición contenida en la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio es contradictoria con respecto a la del arábigo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que *“mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán*



obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos", lo cierto es que el hecho de que la inconforme alegue que ella es una Institución de Crédito por lo que no puede sustraerse de la obligación de reparar los daños que se causen con motivo del trámite de unas providencias precautorias, aunado a que su solvencia económica es reconocida, de ahí no se sigue que la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio deba carecer de aplicación cuando se trate de una Institución de Banca Múltiple, ya que esta última disposición legal no establece algún caso de excepción a la obligación de exhibir la garantía, por razón de la calidad de sujeto en quien recae esta obligación.

Además de las dos tesis que el juez de distrito aplicó sobre este tema en la sentencia recurrida, las cuales la primera de estas fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación y tiene por título: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A OTORGAR GARANTÍA O CONTRAGARANTÍA EN MATERIA DE SUSPENSIÓN, TRATÁNDOSE DE AMPARO DIRECTO", y la segunda de ellas fue emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y tiene como rubro: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. TRATÁNDOSE DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE AMPARO, RESULTA INAPLICABLE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY QUE LAS RIGE", las mismas se ven corroboradas en cuanto al criterio que sustentan por la diversa tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 3086, del Tomo LXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice:

"INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ESTÁN OBLIGADAS A OTORGAR FIANZA EN LOS INCIDENTES DE SUSPENSIÓN. Si se concede la



suspensión del acto reclamado y la parte quejosa lo es una institución de crédito, debe considerársele como un simple particular a quien el acto reclamado puede causar un perjuicio de difícil reparación, si llega a realizarse; y no obstante lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Instituciones de Crédito, es indispensable exigir a la quejosa el requisito de fianza, a pesar de su reconocida solvencia, desde el momento en que la Constitución exige tal garantía para otorgar el beneficio de la suspensión, pues existiendo un tercero a quien pudiera afectar la medida, de la cual derivan daños y perjuicios como resultado de la suspensión, es necesario, conforme a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley de Amparo, que la parte quejosa otorgue garantía bastante para reparar esos perjuicios."

Estos tres criterios son los que resultan aplicables en el caso para fundar y motivar la decisión del juez federal de que en tratándose de las providencias precautorias que promovió la aquí recurrente y quejosa, ésta se encuentra obligada a

exhibir la garantía que establece la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio, ya que esta disposición legal no establece algún caso de excepción para exhibir esta garantía, por razón de la calidad que tenga la persona en quien recae la obligación de exhibir la garantía.

La razón de esta decisión estriba en que si bien la inconforme aduce que los métodos o criterios tradicionales de solución de antinomias de las leyes, resuelven los problemas de interpretación que surjan entre dos o más ordenamientos jurídicos, mediante la aplicación de los criterios jerárquico, cronológico, de especialidad, de competencia, de prevalencia, de procedimiento, de favorabilidad, de justicia e intereses protegidos, así como el de distinción entre principios y reglas, también lo es que estos criterios no le favorecen a la inconforme por lo siguiente:

En cuanto al criterio jerárquico, la propia disidente reconoce que el Código de Comercio y la Ley de instituciones de Crédito son leyes federales



que se encuentran dentro de un mismo nivel jerárquico, por lo que debe de regir el Código de Comercio por ser el que se ocupa de establecer el procedimiento a seguir en el trámite de las providencias precautorias, aspecto que no es regulado por el segundo de estos ordenamientos legales.

El criterio cronológico que establece que en caso de conflicto entre normas provenientes de fuentes jerárquicamente equiparadas, la norma creada con anterioridad debe considerarse abrogada tácitamente y ceder ante la nueva, no resulta aplicable en este asunto, porque como lo reconoce la propia disconforme el Código de Comercio tiene matices procesales y la Ley de Instituciones de Crédito es de tipo sustantivo, por lo que no se debe dar la hipótesis de que el Código de Comercio quede abrogado tácitamente frente al segundo de estos cuerpos de leyes.

De igual modo, el criterio de especialidad carece de injerencia en este asunto, toda vez que si el aspecto de examinar es el trámite de las providencias precautorias, es evidente que el Código de Comercio reviste la calidad de ser una ley especial por reglamentar el procedimiento a seguir en este tipo de medidas, sin que esta calidad se pierda por el hecho de que además regule los juicios orales, ordinarios y ejecutivos, entre otros, ya que lo importante estriba en que el aspecto relativo a las medidas precautorias ni siquiera es mencionado por el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que se le debe considerar como una ley general.

De igual modo, el criterio de competencia tampoco podría favorecerle a la impugnante, porque como lo sostiene la inconforme este criterio se da bajo las siguientes circunstancias: 1. Que se produzca un conflicto entre normas provenientes de fuentes de tipo diverso; 2. Que entre las dos fuentes en cuestión no exista una relación jerárquica, por



estar dispuestas bajo el mismo plano en la jerarquía de fuentes; y, 3. Que las relaciones entre las dos fuentes estén reguladas por otras normas jerárquicamente superiores, atribuyendo a cada una de ellas una diversa esfera material de competencia, de modo que cada una de las dos fuentes tenga la competencia exclusiva para regular una cierta materia.

En el caso, ciertamente entre el Código de Comercio y la Ley de Instituciones de Crédito se produjo un conflicto entre norma provenientes de tipo diverso, ya que el primero de estos ordenamiento jurídico en el aspecto que se analiza regula cuestiones de procedimiento en los juicios, en tanto que la segunda de estas leyes tienen por objeto regular el servicio de banca y crédito, y en específico el conflicto que surge entre ambos ordenamiento jurídicos es porque la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio establece como un requisito para que surta efectos la medida precautoria que se concede, que el solicitante de dicha medida

garantice los daños y perjuicios que pueda causarle a la deudora, en tanto que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito considera a los integrantes del sistema bancario mexicano que no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, como personas morales de acreditada solvencia económica y las libera de la obligación de constituir depósitos o fianzas.

Sin embargo, ante la discrepancia que existe entre las dos disposiciones legales que fueron referidas en el párrafo que antecede, en el caso debe prevalecer la disposición contenida en el Código de Comercio, ya que tiene la calidad de una norma especial, debido a que se encuentra dentro del capítulo XI del Código de Comercio que regula el procedimiento que debe seguirse en una medida precautoria; mientras que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito es una norma general, puesto que no regula lo relativo a la manera como debe llevarse a cabo una medida precautoria.



Aunque es cierto que el Código de Comercio y la Ley de Instituciones de Crédito constituyen dos fuentes de leyes, en las que no existe una relación jerárquica, pues ambas son leyes federales por lo que están dispuestas bajo un mismo plano en este aspecto, lo cierto es que ambas derivan de la Constitución Federal, y en el caso el Código de Comercio encuentra su fundamento constitucional en los artículos 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna, los cuales prevén las garantías de legalidad, de exacta aplicación de la ley y de acceso a la justicia, entre otras, que es lo que le confiere sus bases a los distintos procedimientos judiciales, como lo es el de las providencias precautorias, por lo que atendiendo al principio de especialidad de la ley, ello es lo que determina que deba prevalecer la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio, que regula la necesidad de garantizar los daños y perjuicios que se le pudieran causar a la parte deudora con la concesión de la medida cautelar, máxime que las Instituciones de Banca Múltiple como lo es el banco quejoso son instituciones de crédito privadas que se

encargan de captar ahorros de la población, por lo que no existe la necesidad de darles un trato preferente, y eso es lo que también determina que deba prevalecer la norma especial, que es la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio, frente al artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito que es una norma general, que debe ceder ante la ley especial.

Por lo que hace a los criterios denominados de prevalencia, de procedimiento, de favorabilidad, de justicia e intereses protegidos, así como el de distinción entre principios y reglas, si bien la disidente aduce que conforme al criterio de prevalencia los conflictos surgidos entre normas pertenecientes a subsistemas normativos, debe resolverse el conflicto a favor de alguna de ellas sin detrimento de la otra, con independencia de la jerarquía o especialidad de cada una de ellas; mientras que, refiere que el criterio de procedimiento se inclina por la subsistencia de la norma que se encuentra más apegada a los cánones y formalidades exigidas para su creación; y por su



parte, el criterio de favorabilidad se inclina por la norma más favorable a la libertad de los sujetos involucrados en el asunto; y por otro lado el criterio de justicia e intereses protegidos se inclina bajo la premisa del sujeto al que resulta más justo protegerlo y por la norma que tutele mejor los derechos protegidos; y finalmente, el criterio basado en la distinción entre principios y reglas señala que debe prevalecer la norma que cumpla mejor con alguno o varios principios comunes a las reglas que están en conflicto, lo cierto es que la recurrente sólo se limitó a definir estos criterios, pero fue omiso en explicar por qué estos criterios deben dar lugar a que tenga que prevalecer la aplicación del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito frente a la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio, lo cual impide que este órgano jurisdiccional pueda examinar estas cuestiones al no haberse expresado la causa de pedir del motivo de inconformidad esgrimido.

Incluso, no es verdad que la Ley de Instituciones de Crédito sea supletoria del Código de

Comercio, ya que este último ordenamiento legal en su artículo 1054 señala como supletorios al Código Federal de Procedimientos Civiles y en su caso a la ley de procedimientos local.

No es verdad que las dos tesis que el juez constitucional citó en la sentencia recurrida, las cuales ya fueron mencionadas con anterioridad en esta ejecutoria, encuentren un obstáculo insuperable con la jurisprudencia P./J. 5/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 63, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de mayo de 1995, Novena Época, que dice:

"SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO. EN SU CARÁCTER DE PERSONAS MORALES OFICIALES ESTÁN EXENTAS DE PRESTAR LAS GARANTÍAS QUE LA LEY DE AMPARO EXIGE A LAS PARTES. De la interpretación relacionada de los diversos preceptos constitucionales y legales que regían el



funcionamiento de las sociedades nacionales de crédito, se concluye que dichas sociedades, al formar parte de la Administración Pública Federal Paraestatal y estar señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como empresas de participación estatal mayoritaria, deben ser consideradas con el carácter de personas morales oficiales y, por consiguiente, exentas de prestar las garantías que la Ley de Amparo exige a las partes."

Esto es así porque esta jurisprudencia parte del supuesto de que las Sociedades Nacionales de Crédito forman parte de la Administración Pública Federal Paraestatal y están señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como empresas de participación estatal mayoritaria, por lo que deben ser consideradas como personas morales oficiales, y por ello se les debe exentar de prestar las garantías que la Ley de Amparo exige a las partes.

Sin embargo, aunque la inconforme refiere que se debe aplicar el principio de igualdad jurídica

en torno a esta jurisprudencia, pues los casos semejantes deben ser disciplinados también por normas semejantes y por ello se está en presencia de una analogía que debe partir de un estudio comparativo entre dos situaciones jurídicas, una de ellas establecida en una ley y la otra no, lo cierto es que la jurisprudencia que fue citada en el párrafo que antecede no es aplicable en el caso, ya que se refiere a las Sociedades Nacionales de Crédito, calidad de la que no goza la inconforme, ya que ella es una Institución de Banca Múltiple, lo que implica que es una institución de crédito privada que se encarga de captar ahorros de la población, mismos que utiliza posteriormente para el otorgamiento de créditos, además que estas instituciones se constituyen previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con opinión del Banco de México.

Por tanto, la disconforme carece de razón al sostener que en el caso se debió aplicar el postulado de la analogía que en este asunto derivaría de la aplicación de la jurisprudencia P./J. 5/95 antes



referida, lo cual lo basa en que dicho postulado es un método que nos podría llevar a la fuente orgánica del derecho, para disciplinar los casos semejantes que no están expresamente contemplados en la ley.

Lo anterior es así toda vez que como ya se precisó con anterioridad en esta ejecutoria, la recurrente no se encuentra exenta de exhibir la garantía que establece la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio, ya que esta disposición legal no prevé algún caso de excepción hacia algún tipo de personas para que no se le deba fijar una garantía que tenga por objeto garantizar los daños y perjuicios que se le causen a la parte deudora con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada.

Por consiguiente, también carece de razón el inconforme al sostener que la analogía excede el ámbito de la interpretación propiamente dicha, pues quien aplica este método debe investigar con qué disposición el legislador habría regulado el caso si lo hubiera previsto, atendiendo a la razón inspiradora

del precepto que se trata de aplicar por analogía; que el procedimiento analógico no tiende a investigar la voluntad del legislador, sino a conocer la ratio legis de un precepto para aplicar a un caso semejante no previsto; que el legislador contempló en la Ley de Instituciones de Crédito las prerrogativas que se solicita sean aplicadas, ya que de lo contrario no tendría algún sentido el texto del artículo 86 de la ley en cita, por lo que sería letra muerta su aplicación; que la falta de una determinada disposición normativa es una simple cuestión que no ha sido tomada en consideración, lo que da lugar a que exista una laguna de la ley que debe ser remediada a través del procedimiento analógico, cuestión la anterior que es diferente en el caso del derecho objetivo que no modifica aquella original situación de libertad y que le permite al sujeto de la relación regularla como le plazca; que el juzgador se encuentra frente a dos situaciones, una de ellas es la prevista en la norma y la otra no está prevista, pero contiene elementos de hecho semejantes a los elementos de hecho previstos en la norma, por lo que no basta que exista un



elemento de semejanza o identidad entre los dos casos para que autorice la aplicación del procedimiento analógico, aunque lo cierto es que debe existir el elemento identidad, ya que éste es decisivo para que el tratamiento jurídico sea idéntico al problema práctico que consiste en distinguir cuidadosamente que los elementos comunes son la exhibición de la garantía y los elementos básicos es garantizar los daños y perjuicios que pueda ocasionarle al deudor la medida precautoria, y la garantía es para otorgar la suspensión del acto reclamado por posibles daños a terceros, sin que sea dable otorgar la garantía de audiencia.

Lo antedicho es así ya que si bien la recurrente pretende que se aplique el método analógico e incluso refiere que se deben tomar en cuenta los elementos comunes, así como los elementos básicos y los elementos diversos que por su número y naturaleza no modifican la disposición que se trata de aplicar por analogía, también lo es que la inconforme no expone un razonamiento

tendente a establecer de qué manera se puede justificar la aplicación analógica del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, dentro el capítulo de las providencias precautorias del Código de Comercio, lo cual impide que este órgano jurisdiccional pueda ocuparse de esta cuestión, por lo que el agravio esgrimido debe declararse inoperante.

En esas condiciones, no puede estimarse que se haya infringido en perjuicio de la disidente la tesis intitulada: "ANALOGÍA. PROCEDE LA APLICACIÓN POR, DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN", ya que si bien en la misma se señala que cuando el juzgador para la solución de un conflicto aplica por analogía o equiparación los razonamientos jurídicos que se contienen en una tesis o jurisprudencia, el resultado de esto es que resuelva el punto a tratar exactamente igual al caso que se señala en la tesis, lo cierto es que la recurrente fue omiso en exponer las razones que permitirían establecer que el artículo 86 de la Ley de



Instituciones de Crédito es aplicable por analogía a las providencias precautorias que regula el Código de Comercio.

Asimismo, los artículos 1º, 1063, 1168 y 1176 del Código de Comercio, de ninguna manera constituyen un fundamento para que no le resulte exigible a la disidente la obligación de exhibir la garantía para que surta efectos la medida precautoria que se le concedió, ya que la primera de estas disposiciones legales refiere que los actos comerciales solo se regirán por lo dispuesto en este Código y las demás leyes mercantiles aplicable; el segundo de estos preceptos legales señala que los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo con los procedimientos especiales aplicables conforme a este Código, las leyes especiales en materia de Comercio, y en su defecto por el Código Federal de Procedimiento Civiles y, en último término por el Código de Procedimientos Civiles Local; mientras que la tercera de estas disposiciones legales establece que en los juicios mercantiles únicamente podrán

dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias previstas en este Código; y, finalmente el cuarto de estos preceptos legales estatuye que la retención de bienes decretada en una providencia precautoria se regirá en lo que le resulte aplicable por lo dispuesto en los juicios ejecutivos mercantiles.

Sin embargo, el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito no reviste la naturaleza de una disposición adjetiva, ya que no regula nada que se encuentre relacionado con el procedimiento a seguir en el caso de providencias precautorias, lo cual lo hace inaplicable en el caso para liberar a la inconforme de la obligación de exhibir la garantía prevista en la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio.

Cabe agregar que, el ordinal 2º del Código de Comercio también resulta inaplicable para fundar la aplicabilidad del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que se refiere a la aplicación supletoria de las leyes para los actos de



comercio, es decir, que alude a cuestiones sustantivas y no de procedimiento.

En consecuencia, no se infringe en perjuicio de la inconforme los principios de legalidad, acceso a la garantía tutelar, exhaustividad y de debida fundamentación y motivación, ya que el juez de distrito interpretó la fracción V del artículo 1075 del Código de Comercio y expuso las razones por las que estimó que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito no podría ser aplicado en tratándose de las providencias precautorias que regula el Código de Comercio, cuya interpretación resultó correcta porque esta disposición legal impone de manera genérica a la solicitante de una medida precautoria la obligación de garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionarle a la parte deudora, sin hacer alguna distinción en atención a la calidad de la persona que solicita esa medida.

En consecuencia, el hecho de que la inconforme tenga la presunción iure et iure de ser





autoridades que quedaron precisados en el
resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta
resolución, devuélvanse el cuaderno de amparo y
demás constancias que remitió el juez de distrito y
en su oportunidad archívese el expediente como
asunto concluido.

A S I lo resolvió el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por
unanimidad de votos de los Magistrados Presidente
Marco Antonio Rodríguez Barajas, María del Carmen
Aurora Arroyo Moreno y Wilfrido Castañón León,
siendo ponente el tercero de los nombrados, quienes
firman conjuntamente la sentencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley de
Amparo, con el Secretario de Acuerdos que autoriza
y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS

LA FIRMA QUE ANTECEDE Y ÉSTAS, SON PARTE FINAL DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL AMPARO EN REVISIÓN CIVIL 294/2019, INTERPUESTO POR [REDACTED]

MAGISTRADA

Melany M
**MARÍA DEL CARMEN AURORA
 ARROYO MORENO**

MAGISTRADO

[Signature]
WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

SECRETARIO DE ACUERDOS

[Signature]
IRVING VASQUEZ ORTIZ

En 04 NOV 2019 quedó
 engrosada la sentencia que antecede.-
 Doy fe.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL AMPARO EN REVISIÓN CIVIL 294/2019, INTERPUESTO POR [REDACTED]

Gvp:edith

05 NOV 2019

En 05 NOV 2019, se notifica a la recomendación y
Ministerio Público de la Federación
 Con fundamento en los artículos 26, fracción III Y 29 de la Ley de Amparo. Se tiene por hecha la notificación de la resolución que antecede, habiéndose hecho la publicación de ley, por lista de esta misma fecha. Doy fe.

[Signature]
 Lic. Alejandra Balderas Álvarez

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocumentoRespuesta.pdf
Secuencia: 3144344

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

| | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------------------|----|-------------|
| Firmante | Nombre: | Irving Vásquez Ortiz | Estado del certificado: | OK | Vigente |
| | CURP: | VAOI900522HOCSRR01 | | | |
| Firma | Serie del certificado del firmante: | 706a6620636a660000000000000000000000d04b | Revocación: | OK | No Revocado |
| | Fecha: (UTC / Ciudad de México) | 04/03/2020T15:09:45Z / 04/03/2020T09:09:45-06:00 | Estatus de firma: | OK | Valida |
| | Algoritmo: | SHA1/RSA_ENCRYPTION | | | |
| | Cadena de firma: | 3a 81 b6 b3 49 21 9b f6 36 51 6f 0a 3f f2 5c 25 ad 85 6a a5 e7 c8 0f 45 f5 9d d0 d1 c2 a8 26 ff 28 57 6d f5 49 01 7c e6 38 57 1c 28 ff 00 7a f6 41 28 bb f9 91 20 55 36 c4 65 c5 74 e5 7e ad ee 77 51 bf c5 00 9b 2e a3 13 0f b2 a7 54 5f 3e 0b 91 9f 4e e5 80 ad c1 91 04 33 4e 70 76 41 76 64 c8 0c da 1f 10 fd 43 bb 84 56 92 d4 a1 dd f9 91 b9 0d 5b 05 c7 f4 8c a6 83 10 0b 37 dc 28 10 a2 0a a2 12 ba af 36 0c 11 69 27 93 00 83 25 c9 90 af 44 b3 26 59 44 ac 5a da bf dc 09 21 d1 00 89 46 2e 86 7d cb c9 66 2a 06 6a ec 24 dd da 22 2a 21 bc 75 54 76 5c 02 a9 1e d6 80 c4 93 3b e5 e4 02 cf 1f 8e 28 fd af 6f a1 28 83 ca c0 b6 67 c9 5e a8 4a 40 e0 34 d4 e1 c4 ff 03 53 9d 0b a8 e6 2c e8 fc 6a a0 4c b5 68 08 1a 13 b0 f2 7b f3 c8 4c d9 bb 7f b6 b6 2f ff 59 26 ed 17 4f 24 d5 d3 | | | |
| Validación OCSP | Fecha: (UTC / Ciudad de México) | 04/03/2020T15:09:03Z / 04/03/2020T09:09:03-06:00 | | | |
| | Nombre del emisor de la respuesta OCSP: | OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| | Emisor del certificado de OCSP: | Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal | | | |
| | Número de serie del certificado OCSP: | 706a6620636a660000000000000000000000d04b | | | |
| Estampa TSP | Fecha: (UTC / Ciudad de México) | 04/03/2020T15:09:45Z / 04/03/2020T09:09:45-06:00 | | | |
| | Nombre del emisor de la respuesta TSP: | TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación | | | |
| | Emisor del certificado TSP: | AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación | | | |
| | Identificador de la secuencia: | 3148291 | | | |
| | Datos estampillados: | 6295EE870F7D294D978D8E5E8D9CC2C272D2DE6F | | | |